

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 18° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-24964-2019
CARATULADO	: CASTILLO/FISCO DE CHILE- HOSPITAL DE
CARABINEROS	

Santiago, veintinueve de Abril de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Don Pedro Blaset Castro, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Sótero del Río n°326, n°707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don **JUAN GUILLERMO ROLDÁN BERNAL**, jubilado, domiciliado en n°2067, Ottawa Street, Regina Saskatchewan, S4P 1P9, Canadá; don **SANTIAGO ENRIQUE ROJAS CAMPOS**, contador general, domiciliado en calle René Pienovi, Pasaje Telesforo Barahona, casa n°5, Recreo, Viña Del Mar; don **RENÉ ALEJANDRO ROJAS TRINCADO**, pensionado, domiciliado en calle Valle Central n°0882, Villa Mirador de Los Andes, Puente Alto; don **VÍCTOR ALAMIRO LÓPEZ ZAMBRANO**, ingeniero en telecomunicaciones, domiciliado en Pasaje Ingeniero Eduardo Domínguez n°1021, comuna de Maipú; don **BERNARDO CARVAJAL SEPÚLVEDA**, jubilado, domiciliado en calle Matilde n°622, Belloto Centro, comuna de Quilpué; don **JAIME RICARDO SALAZAR JELDRES**, mecánico de mantención, domiciliado en 1700 Mountain Boulevard, ciudad de Oakland, California, CP 94611, Estados Unidos; y de don **GUILLERMO GABRIEL CASTILLO ESQUIVEL**, técnico en sonido, domiciliado en calle Millalelmo n°236, comuna de Los Vilos, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas n°1687, comuna de Santiago.

Explica que los hechos que motivan la demanda acaecieron los meses previo y posteriores al golpe de Estado producido el 11 de septiembre de 1973, encabezado por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y fueron cometidos en contra de los demandantes por funcionarios de la Armada de Chile y por empleados fiscales de dicha rama militar, todos funcionarios públicos, quienes detuvieron de manera ilegal e inflingieron torturas en contra de sus pares de armas, marinos y suboficiales que no estaban de acuerdo con la asonada golpista, por ser todos ellos respetuosos del Estado de Derecho y particularmente a su juramento de respetar la Constitución Política de la República y su bandera patria.

Afirma que cada uno de los demandantes fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”.



Luego, procede a consignar los relatos individuales de cada uno de los demandantes.

Respecto de don Juan Guillermo Roldán Bernal, reconocido en el Informe Valech con el N°21.492, en agosto de 1973, era Cabo 2° Artillero de la Armada. El 7 de agosto de 1973, mientras desempeñaba sus funciones en el Destructor “Blanco Encalada”, como a las 09:00 horas de la mañana, un marinero comunica a Juan Roldán, que el Segundo Comandante necesitaba que acudiera a su camarote, para comunicarle algo respecto del estado de salud de su esposa, operada del hígado el mes anterior. Juan obedece y concurre donde su superior, quien le empieza a hacer preguntas y a interrogar sobre reuniones que había sostenido con el Sargento Cárdenas, miembro también de la tripulación del Buque. Le consultaban sobre los contenidos de estas reuniones y sus orientaciones políticas, sobre qué conversaban. Al no recibir respuestas, el Segundo Comandante trató de manera grosera e irrespetuosamente a Juan, a quien calificó de “vende patria” y “traidor”. Acto seguido, Juan Roldán fue enviado al Cuartel Silva Palma, en donde quedó en calidad de incomunicado en una celda grande, junto a otros 20 marinos. Como a las 18:00 horas fue conducido a la Academia de Guerra Naval, edificio colindante al Cuartel Silva Palma, para ser interrogado por el Fiscal Naval Villegas y su ayudante, el teniente Pedro Benavides Monzzoni. En el trayecto, Juan Roldán se cruzó con el cabo Pedro Lagos a quien llevaban en pésimas condiciones físicas, demacrado y con el rostro morado e hinchado por los golpes recibidos. Juan Roldán fue sometido a un interrogatorio con amenazas y golpes con un puntero, el objetivo del interrogatorio era saber sobre su participación en reuniones con dirigentes políticos y quiénes más habían asistido a estos encuentros, que “otros civiles” se encontraban presente y sus nombres. Juan fue amenazada con traerían a su esposa y cuñadas para ser violadas si él no confesaba. Terminado el interrogatorio fue devuelto al Cuartel Silva Palma, en régimen de aislamiento. De noche don Juan junto a otros marinos, fueron trasladado a la Base Aeronaval “El Belloto”, perteneciente a la Armada, subidos a un avión y llevados a Talcahuano. Tras el aterrizaje, los marinos detenidos fueron conducidos al Fuerte Borgoño, perteneciente a la Infantería de Marina. Apenas fueron bajados del camión, don Juan y los demás marinos detenidos son golpeados por un grupo de marinos, con golpes de pie y culatazos de fusil en el cuerpo y la cabeza. Tras esta golpiza, Juan Roldán fue conducido a una barraca donde fue desnudado, luego de lo cual lo llevaron a una especie de cancha donde lo hicieron correr mientras recibía golpes de puño y varillazos. Estaba mojando permanentemente, recuerda que lo peor le sucedía cuando caía al suelo por las zancadillas que le hacían, ya que entre varios infantes de marina le propinaban patadas en los testículos y en el cuerpo, hasta que lograba ponerse de pie, apenas caminando, para evitar que lo siguieran golpeando. Tras estos primeros malos tratos, Juan fue dejado en una zanja con barro hasta la cintura. Era de noche y hacía mucho frío, por lo que la situación era insoportable. A continuación, Juan fue conducido a una sala



de interrogatorio, donde fue interrogado con aplicación de corriente eléctrica. También fue introducido, cabeza abajo, amarrado de pies y manos y colgando de una viga, en un tambor con aguas fétidas. Lo mantenían sumergido hasta “perder la respiración” o provocar asfixia, tratamiento que se repitió en reiteradas oportunidades, hasta que lo obligaron a firmar una declaración, que debió ratificar entre el fiscal naval, amenazado de ser torturado nuevamente si se retractaba de lo que había firmado. Tras pasar por la Isla Quiriquina, Juan fue regresado a Valparaíso a bordo del Buque “Orella”, bajo permanentes amenazas de ser lanzado al mar. Fue dado de baja y enviado a la cárcel pública. Las condiciones carcelarias empeoraron tras el golpe de Estado, los marinos detenidos sufrieron diversas formas de hostigamiento y varios de sus abogados fueron detenidos y también torturados. El fiscal naval cambió los cargos en su contra. Tras un tiempo en la cárcel pública, con motivo de la declaración de Estado de guerra, los marinos detenidos fueron enviados a los campos de concentración “Isla Riesco” o Melinka, ubicado al interior de Colliguay, comuna de Quilpué, lugar inhóspito y aislado entre los cerros, consistente en un conjunto de unas 60 mediaguas instaladas en forma de “U”, para unos 200 presos políticos. Eran mediaguas de madera, de precaria construcción, el calor era insoportable durante el día y muy frío durante la noche. El conjunto estaba rodeado de doble alambrada. Los castigos físicos eran permanentes y cotidianos para quienes no respetaban el “supuesto reglamento”, que los marinos detenidos y los demás presos políticos estaban obligados a observar lo que causaba ira y dolor que debían controlar, ya que los Infantes de Marina los rodeaban armados con ametralladoras. A quienes habían sido marinos, eran tratados de “traidores a la patria”, con castigos y tratamientos especiales al grupo. Durante las noches se hacían ejercicios de defensa del campamento, haciendo explotar bombas y disparando ráfagas de ametralladoras, lo que los obligaba a tirarse al suelo como precaución; al día siguiente les comunicaban que unos extremistas habían intentado tomarse el campo de concentración. Esta situación se prolongó hasta el mes de marzo, ya que Juan y los marinos fueron trasladados a otro campo de concentración ubicado en la comuna de Puchuncaví. El cierre perimetral de este campo debió ser construido por los propios detenidos, bajo coerción, vigilados y dirigidos por los Infantes de Marina, trabajos forzados que se prolongaron por varias semanas. Tras la llegada de otros presos políticos a los campos, los marinos fueron devueltos a la cárcel de Valparaíso; Juan fue condenado por “Sedición y motín frustrado”, en la causa N° 3.926, a ocho años de cárcel, de los cuales cumplió cinco. Recuperó su libertad en abril de 1978, estando en la Penitenciaría de Santiago, donde había sido trasladado desde la cárcel Pública de Valparaíso.

En cuanto a don Santiago Enrique Rojas Campos, expresa que fue reconocido en el Informe Valech con el n°21.183 y era Cabo 2° Mecánico Electrónico de la Armada de Chile. Añade que en agosto de 1973, Santiago Rojas se encontraba destinado al buque de guerra “Crucero O’Higgins”, apostado en la Base Naval del puerto de Talcahuano. El 7 de



agosto de ese mismo año, fue “desembarcado” engañado, pues se le señaló que debía ir a buscar unos materiales de trabajo a la bodega. Subió a un vehículo, que el trayecto se desvió y se dirigió hacia el Cuartel Borgoño, perteneciente a los infantes de Marina, donde Santiago fue ingresado bajo la custodia de varios soldados, sin explicación alguna, a las 18:00 horas. Santiago fue desnudado completamente y le ataron las manos por la espalda, tras lo cual recibió golpes de puño y patadas, los aprehensores (marinos), lo golpeaban y al mismo tiempo le gritaban “traidor” y “antipatriota”, exigiéndole que confesara “todo”. Tras el recibimiento, fue llevado a un campo de entrenamiento militar, donde se dio cuenta que muchos marinos estaban siendo torturados, estaban tirados en el suelo, ensangrentados, desnudos y cubiertos de barro, Alcanzó a distinguir a algunos compañeros marinos de su buque y quienes lo golpeaban le señalaron lo que le iba a suceder si se negaba a colaborar. Fue obligado a correr mientras le propinaban golpes con la culata del fusil y patadas hasta que lograban que cayera, en esos momentos aumentaba el castigo, ya que mientras estaba en el suelo quedaba sin conocimiento y para reanimarlo, le tiraban baldes de agua, luego lo obligaban a ponerse de pie y continuar la marcha. En algún momento, Santiago no pudo sostenerse más, por lo que fue arrastrado hasta un recinto bajo techo, donde le sumergieron la cabeza en un tambor con aguas fétidas, con excrementos humanos. Lo mantenían sumergido hasta que perdía la respiración, hasta que le levantaban la cabeza tirándole el pelo; este procedimiento se repitió por un tiempo prolongado. No recuerda cuanto tiempo transcurrió, porque perdió la noción del tiempo. Posteriormente fue conducido a un lugar en que fue interrogado por oficiales de la Armada, quienes le preguntaron por reuniones políticas que habría sostenido con otros marinos o civiles, así como los nombres de los participantes, Cuando una respuesta no les satisfacía, era golpeado nuevamente. Al término de este interrogatorio, fue obligado a firmar una declaración que no le permitieron leer, bajo amenazas de ser devuelto al Cuartel Borgoño si no ratificaba lo firmado ante el Fiscal. Fue trasladado al gimnasio de la Base Naval, donde se encontró con muchos marinos que estaban en sus mismas condiciones, también habían sido torturados salvajemente y nadie había recibido atención médica. Fue dado de baja, procesado en la causa rol 3.926. Traslado a la Cárcel de Valparaíso junto a otros marinos detenidos. Pasó por varios recintos, y en todos ellos sufrió, al igual que sus compañeros, hostigamiento y amenazas de parte de los agentes de Gendarmería como de los custodios pertenecientes a las fuerzas armadas. Eran allanados periódicamente. Esta situación empeoró tras el golpe de Estado: varios de sus abogados fueron detenidos, e incluso algunos torturados, como don Pedro Henríquez de la ciudad de Concepción. La Fiscalía Naval cambió los cargos a unos más graves y no tuvieron posibilidad de una adecuada defensa. Junto a sus compañeros marinos, Santiago pasó por los campos de concentración de Melinka o Isla Riesco, ubicado en Colliguay, al interior de la comuna de Quilpué, compartiendo con alrededor de 200 presos políticos, con escasa alimentación y permanente hostigamiento psicológico, debiendo



presenciar los castigos físicos que se les aplicaba colectivamente, a quienes supuestamente no cumplían con el reglamento del Campo. Durante algunas noches los soldados hacían ejercicios de guerra, disparando ráfagas de ametralladoras y haciendo explotar bombas, lo que generaba una tensión que no les permitía dormir, ya que si disparaban a las mediaguas donde dormía, fácilmente traspasaba la frágil madera de que estaban construidas, con la consecuente muerte de muchos de ellos. En marzo del 1974, fue trasladado al Campamento de Prisioneros de Puchuncaví, donde fueron obligados a realizar trabajos forzados, en particular debieron levantar postes y hacer los tendidos de alambre. En abril fue devuelto a la cárcel pública de Valparaíso, donde los marinos detenidos debieron convivir con delincuentes comunes y sus pandillas, con la permanente amenaza de una agresión, además de soportar permanentes allanamientos de los gendarmes y también de los Infantes de Marina. Estos allanamientos significaban además la pérdida de todos los alimentos del sustento diario que les enviaban sus familias. Fue condenado a tres años de cárcel, los que cumplió íntegramente, recuperando su libertad en septiembre de 1976.

Respecto de don René Alejandro Rojas Trincado, éste se encuentra reconocido en el Informe Valech con el N°21.418 y era Marinero 1°, especialidad de máquinas. Indica que el 7 de agosto de 1973, René Rojas se encontraba cumpliendo servicios como personal de planta en la Armada de Chile, a bordo de Crucero de guerra “Bernardo O’Higgins” en Talcahuano. Ese día fue llamado a presentarse en el “portalón” de guardia, mediante el alto parlante del buque. Al llegar a dicho lugar, fue detenido por dos oficiales con el grado de tenientes segundos, quienes no se identificaron ni le presentaron orden alguna de detención. Fue desembarcado, subido a un vehículo del Centro de Abastecimiento de Asmar y conducido al Fuerte o Cuartel Borgoño. Al llegar, el recinto se encontraba totalmente oscuros, René fue obligado a bajar del vehículo a golpes y culatazos y trasladado a una “casamata”, donde fue totalmente desnudado. Desnudo, René fue golpeado salvajemente por alrededor de doce infantes de marina en tenida de combate y con los rostros pintados, estaban bajo el mando de dos oficiales: el teniente Alarcón y el Teniente Boetch. Fue golpeado con varillas, guantes mojados, “patadas y combos” y otros elementos contundentes en todo el cuerpo, con el fin de que entregara información sobre contactos políticos. Como René no tenía respuesta a lo que le preguntaban, lo introdujeron cabeza abajo, con los brazos atados a la espalda, en un tambor con aguas fétidas, dejándolo ahí hasta que perdía la capacidad de aguante; esta maniobra la realizaron reiteradamente durante un tiempo muy prolongado. El lugar donde era torturado estaba con baja temperatura, hacía un frío insostenible. Luego de este “procedimiento” brutal e inhumano, lo bajan y lo obligan a introducirse en un hoyo de unos 50 centímetros de profundidad, lleno de barro, golpeándolo permanentemente con varillas, palos, puños y culatazos de fusil. Las torturas duraron toda la noche, en la que no pudo descansar ni menos dormir, expuesto a la hipotermia causada porque estaba desnudo y permanentemente mojado. Al



final, fue conducido a una caseta de madera donde el capitán Kohler y otros oficiales, lo obligaron a firmar una declaración que debió ratificar ante el Fiscal Naval, bajo amenaza de que volverían a torturarlo con más apremios y castigos sino lo hacía.

Fue dado de baja y trasladado a la cárcel de Concepción, en septiembre de 1973, donde vivió el golpe de Estado, siendo cruelmente hostigado por gendarmes por el cambio de la situación política, amenazándolo con fusilamiento junto a sus compañeros marinos que se encontraban en ese recinto, siendo testigo indirecto del fusilamiento del dirigente comunista Santiago Carrillo y otros militantes comunistas de Lota. Como secuela de las torturas, don René sufrió delirios de persecución, pérdida del sueño y decaimiento generalizado, tanto física y mental. Debió recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico. Fue condenado por el Juzgado Naval de Valparaíso, en la causa rol 3926 de 1973, recuperando su libertad el 22 de octubre de 1974.

En lo relativo a don Víctor Alamiro López Zambrano, reconocido en el Informe Valech con el N°13521, refiere que en 1973 era Marinero 1° mecánico electrónico, subespecialidad radares de superficie. Fue detenido el siete de agosto de 1973, en Crucero Prat, donde estaba destinado, que se encontraba en reparaciones es ASMAR, Talcahuano. A las 24.00 horas, llegó teniente electrónico de Inteligencia Naval, Santiago Lorca Valenzuela, su jefe directo en la División Electrónica del Crucero Prats, quien le señaló que debían salir en comisión de servicios a la Base Naval. Le preguntó “a esta hora”, a lo que le repitió que sí, porque habían llegado unos repuestos para el radar que estaban reparando. Cuando caminaban a estribor, se unió un Subteniente de Infantería de Marina. Lo trasladan en un furgón color gris de la Armada hasta el Fuerte Borgoño. En el vehículo iba también su compañero de tareas, Carlos García. Lo condujeron al Fuerte Borgoño, ubicado en la península de Tumbes. Una vez que llegaron preguntó dónde estaban, pero lo hicieron callar y le ordenaron bajar. Alrededor del vehículo había un escuadrón de unos 12 soldados Infantes de Marina, con tenida de combate y rostros pintados. Recibió una golpiza con pies y fusiles, largo rato, que le provocaron vómitos. Llevaron a su presencia a Carlos García Herrera, de su misma división, al que arrastraban por la deplorable condición en la que estaba. Lo llevaron a la presencia de su jefe, Teniente Santiago Lorca y el capitán Kohler, para ser interrogado. Les señaló que un grupo de oficiales del buque les hablaba de realizar un golpe de Estado en contra del gobierno, con lo cual él no estaba de acuerdo, ya que la formación entregada en la Escuela se contradecía con esos planteamientos.

Lorca señaló que él sabía más, por lo que fue enviado a una nueva sesión de tortura. Fue obligado a desnudarse a punta de golpes de botas, culatazos de fusil y bayonetas, también amenazado de muerte, y maniatado con cordeles. Le hicieron repetir innumerables veces su nombre, grado, número de serie, especialidad y razón de estar ahí, acompañado de golpes y culatazos. Lo hicieron correr en un campo de entrenamiento para infantes de marina, donde además le pegaban sin tregua cuando caía producto del dolor y el frío, lo



golpeaban con más dureza para que se levantara. Se interrumpían sólo para preguntarle por reuniones con “políticos”. También fue obligado a introducirse en un foso o zanja lleva de barro, donde debía hundirse y permanecer por un tiempo prolongado, lo que le produjo hipotermia, hasta que lo llevaron a vestirse. Ya en la madrugada del 8 de octubre, aproximadamente a las 02.30 horas, fue llevado a una mediagua, en la que tenían un tambor de unos 200 litros, lleno de barro, excremento y orina. El Teniente Alarcón y Tapia lo interrogaban. Le pegaban con guantes mojados en el plexo y el estómago y lo sumergían en el tambor, ayudados por dos infantes de marina, de la tropa. Lo mantenían sumergido de 20 a 40 segundos. Continuaron con este método hasta la mañana del día 8, era alternados con golpes de guantes y varillas mojadas, golpes dirigidos en contra de sus genitales y correazos. Uno de los tenientes lo golpeaba con una varilla al parecer de mimbre mojado en su aparato genital, incluyendo testículos y le propinaban correazos en las nalgas desnudas, bajo amenazas de no detenerse y de improperios soeces de connotación sexual. De madrugada se desmayó, perdiendo el conocimiento. El recinto de detención y torturas estaba compuesto por mediaguas sin piso (entinglado), sin ventanas, vidrios, puertas o radier, el piso era de tierra. No tenía instalaciones sanitarias, dos soldados infantes de marina los vigilaba de día y noche, las celdas eran 10 casamatas de la ciudadela y los sitios de torturas estaban en las mismas casamatas. Había oficinas administrativas. Estuvo 73 horas sin dormir e impedido de realizar funciones fisiológicas para orinar durante 12 horas y defecar, unas 20. Sin comida 18 horas. El Comandante del Fuerte Borgoño a la época era Capitán de Fragata Infante de Marina Bunster, el Segundo Comandante el Capitán de Corbeta Jaeger, responsable de las torturas. En línea jerárquica seguían Luis Kholer Herrera, quien lo torturó y el Capitán de Corbeta Infante de Marina Acuña, que también lo torturó. El 8 de agosto fue llevado a interrogatorio ante el Capitán Kholer, el Capitán Acuña y el Teniente Santiago Lorca, quien lo interrogó por otros compañeros del Crucero Prats, a quienes él conocía. Fue conducido a declarar ante un Fiscal ad-hoc, con 15 o 20 compañeros, amenazados de muerte y torturas. Los conduce y vigila Kholer, quien además los amenaza y algunos soldados infantes de marina con metralletas y tenidas de combate. Como a las 15.000 horas de 15 de agosto los llevan desde el Fuerte Borgoño a la Fiscalía Naval en la Base Naval de Talcahuano. Declaran uno a uno previa amenaza del Capitán Kholer, si no declaraban lo mismo que habían reconocido bajo torturas y apremios, serían nuevamente torturados. En la sala de declaración un oficial infante de Marina de la dotación del Fuerte Borgoño estaba presente, y le corregía lo que iba declarando, para que quedara escrito de la manera que el oficial quería. Como a las 18.30 horas los llevan de vuelta al Fuerte Borgoño, esa noche no pudieron dormir por miedo a ser nuevamente torturados. Los detenidos estaban en celdas separadas, vigilados por infantes de marina. Al día siguiente nuevamente son llevados a ratificar sus declaraciones a la Fiscalía Naval, además les realizan careos entre ellos y otros detenidos.



Permanecieron cinco días incomunicados, Víctor estuvo días en un torreón que estaba a la entrada de la Base Naval, de 1 metro por 1 metro, sin abrigo. Otra noche estuvo en el Gimnasio Naval y dos noches en unas cabañas de concentración del Club de deportes Naval.

Tras la incomunicación, estuvo 23 días detenido con otros marinos en el Cuartel Rodríguez en la Base Naval. El Fiscal Naval Víctor Villegas los procesó por incumplimiento de deberes militares y el 14 de agosto fueron sometidos a proceso en la causa 3926 y dados de baja. Fueron enviados a la Cárcel Pública de Concepción. En este recinto vivió el golpe de Estado. Ese día los marinos fueron llamados por la dirección de Gendarmería, para comunicarles que las circunstancias habían cambiado, por lo que nada les podían asegurar respecto de sus vidas, es más, Víctor fue encerrado en la misma celda de los dirigentes sindicales que posteriormente serían fusilados, lo que le desencadenó mucha angustia y depresión, por haber quedado expuesto a la más absoluta indefensión. Sus abogados también habían caído presos por motivos políticos. Tras el golpe de Estado, sin nuevos antecedentes le cambian los cargos y pasa de estar procesado por incumplimiento de deberes militares a sedición o motín frustrado, el 28 de septiembre de 1973. La nueva figura penal era mucho más gravosa y su defensa casi imposible. Por razones de carácter procesal, Víctor fue trasladado a la Cárcel Pública de Valparaíso, junto a otros marinos de la causa 3.926, donde sufrió maltratos y castigos tanto de Gendarmería como de la marina por los permanentes allanamientos a los que eran sometidos, en los que les destruían incluso sus alimentos de sustento diario. El año 1975 se le diagnosticó Tuberculosis pulmonar, por lo que tuvo que ser internado en el Sanatorio de Peñablanca. El año 1976 fue dejado en libertad, luego de haber sido condenado a tres años de cárcel, los que cumplió en su totalidad. Por razones de seguridad personal, a raíz de los permanentes hostigamientos de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, debió abandonar el país, exiliándose en Noruega. Regresó a Chile en el año 1990.

En cuanto don Bernardo Carvajal Sepúlveda, reconocido en el Informe Valech con el N°4920, Marinero 1°, menciona que el 7 de agosto de 1973, Bernardo estaba de servicio a bordo del Crucero Prat, en la Base Naval de Talcahuano, en la división de electricidad. Alrededor de las 20:30 horas fue desembarcado y subido a un vehículo de la institución por orden de un oficial de apellido Jaeger. Al ingresar al vehículo, Jaeger le apuntó con un revolver en la cabeza, ordenándole guardar silencio. En el interior identificó a otro marino Mario Patricio Cordero Cedraschi, quien era compañero de trabajo. Ambos fueron conducidos al Cuartel Borgoño, ubicado en la península de Tumbes, donde fueron entregados a infantes de marina, quienes tenían sus rostros pintados. Fueron bajados del vehículo con golpes de culatazos de fusil y varillas, los golpeaban en la espalda y las piernas. Bernardo recuerda que producto de los golpes se caía al suelo, por los fuertes dolores que le provocaban, situación que provocaba una nueva golpiza con patadas en el





cuerpo, incluidos los testículos y en su cabeza. Para detener la paliza debía ponerse de pie. Cuando extenuado, yo no podía caminar, fue introducido en una zanja con barro que le llegaba a la cintura, Fue obligado a acostarse y permanecer en esa posición. El frío y la posición forzada en el barro, le provocaron espasmos y “tiritones” que no podía controlar. No recuerda cuánto tiempo después, fue trasladado a una barraca donde fue interrogado, se mantuvieron los golpes y le aplicaron corriente eléctrica, a pesar de la condición de casi hipotermia que sufría. Perdió el conocimiento, por la fatiga y la situación de estrés a la que estaba sometido. Se despertó al ser colgado de los pies, atado de pies y manos, luego lo introdujeron en un tambor con aguas fétidas. Lo mantenían sumergido hasta cuando perdía la respiración. Este “procedimiento” le fue aplicado reiteradamente, alternado con golpes de corriente eléctrica en las partes sensibles del cuerpo. Cuando amanecía, fue obligado a firmar una declaración que no pudo leer. Debía ratificar lo escrito ante el Fiscal Naval, sin contradecirse, bajo amenaza de ser conducido nuevamente al Cuartel Borgoño. Tras “el trámite” con el Fiscal, fue traslado con otros marinos detenidos a la Isla Quiriquina, donde permanecieron aislados. Posteriormente los llevaron al Destructor Orella, trasladándolo a Valparaíso. Tras el golpe de Estado se declaró el estado de guerra, por lo que fueron trasladado junto a otros marinos presos y presos políticos a los campos de concentración denominado “Melinka” o “Isla Riesco”, a fines de noviembre de 1973, ubicado al interior de Colliguay, comuna de Quilpué y posteriormente a “Puchuncaví”, ubicados en la Quinta Región. En Ritoque se encontraba detenido con alrededor de 200 presos políticos a cargo de la Infantería de Marina. En este lugar fueron expuestos a las arbitrariedades más aberrantes imaginables. Por el aislamiento en que se encontraba Bernardo, estaba en permanente riesgo su vida y su seguridad, se encontraban sin ningún derecho ni protección, ya que su familia no sabía dónde se encontraba; tenían escasa alimentación y sufrían un permanente hostigamiento psicológico, debiendo presenciar colectivamente, los castigos físicos que se les aplicaba, a quienes supuestamente no cumplían con el reglamento del campo. Durante algunas noches los soldados hacían ejercicios de guerra, disparando ráfagas de ametralladoras y haciendo explotar bombas, lo que generaba una tensión que no les permitía dormir, ya que si disparaban a las mediaguas donde dormía, fácilmente traspasaba la frágil madera con la que estaban construidas. En marzo del 1974, junto a los demás marinos fue trasladado al Campamento de Prisioneros de Puchuncaví y con sus compañeros fue obligado a realizar trabajos forzados, ya que debieron levantar postes y hacer los tendidos de alambre. En abril fue devuelto a la cárcel pública de Valparaíso, donde debió convivir con los delincuentes comunes y sus pandillas; soportar permanentes allanamientos de los gendarmes y también de los Infantes de Marina, con la pérdida de todos los alimentos del sustento diario. Fue procesado y acusado de Sedición y Motín Frustrado en la causa rol N°3.926 de la Fiscalía Naval y condenado a 3 años, los que cumplió íntegramente. Recuperó su libertad en agosto de 1976.



Sobre don Jaime Ricardo Salazar Jeldres, reconocido en el Informe Valech con el N°22.082, Especialista Mecánico Artillero, él ingreso en enero de 1969 a la Escuela de Grumetes de la Armada y en el año 1973 fue destinado al Crucero “Latorre” como especialista mecánico artillero. El 6 de agosto de 1973 fue detenido aproximadamente a las 18:00 horas, por el oficial a cargo de su división, del que no recuerda su nombre, no obstante, el comandante del buque era el Capitán de Navío Carlos Fanta Núñez. El día de la detención, desarrolló sus actividades profesionales de forma normal, a cargo de una batería de 40 MM (cañones antiaéreos). Al finalizar sus labores, aproximadamente a las 16:00 horas, se retiró a preparar sus cosas al sector de entrepunto (dormitorios) para salir de “franco”. En esos momentos, por los altavoces del buque lo llaman junto a otros cinco compañeros de funciones. Debía presentarse en el camarote del Oficial a cargo. En ese lugar fueron interrogados sobre supuestas actividades de carácter político que ellos estaban desarrollando, ante lo cual todos negaron los hechos. El oficial llamó entonces a unos buzos tácticos, encargados de realizar guardia, quienes por sus instrucciones los amarraron y los vendaron, tras lo cual fueron sacados del barco e introducidos unos sobre otros en unos vehículos de la institución y conducidos al cuartel “Silva Palma”. Al llegar a este recinto, Jaime Salazar Jeldres fue puesto en un camarote de suboficiales, acondicionado como celda para incomunicados, momento en que le sacan las vendas. Permaneció incomunicado hasta el día viernes 10 de agosto de 1973, periodo en el cual no pudo hablar con nadie, sólo ingresaba periódicamente un marinero para llevarle alimentos. El 10 de agosto de 1973 fue sacado en horas de la noche. Debíó caminar por un pasillo y abordar un camión celular. Uno de los funcionarios encargados de la seguridad era de apellido Serene, a quien lo recuerda por cuanto lo conocía, además que por su estatura era inconfundible, ya que era el más alto de todos. Al interior del camión celular iban el sargento Juan Cárdenas, el cabo Alberto Salazar, el cabo Pedro Lagos, el marinero Ernesto Zúñiga, con quienes había sostenido una reunión en la comuna de Puente Alto junto al ex Senador Carlos Altamirano y Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, en la casa de don Osvaldo Puccio. También estaba Oscar Carvajal, quien no participó de esta reunión y otras personas que no recuerda, uno de ellos era de apellido Cisternas. El último en subir fue Cárdenas, quien evidenciaba haber sido brutalmente golpeado, pues traía uno de sus brazos en cabestrillo, lo tenía dislocado. Cárdenas era el líder del grupo, por cuanto era el mayor y tenía más grado. Luego de unos minutos, el camión fue puesto en movimiento y los trasladaron hasta la base aeronaval de “El Belloto”. Sin explicarles nada y con constantes insultos, fueron obligados a subir a un avión C-10, iban sentados y custodiados por dos guardias en la parte delantera y dos en la parte posterior, todos ellos armados con fusiles HK. Luego de unas horas de vuelo llegaron al aeropuerto Carriel Sur en Concepción. Al posarse el avión en la losa del aeropuerto, fueron escoltados por jeeps de la armada, hasta el sector donde finalmente el avión se detuvo y los hicieron descender. Al descender nuevamente son insultados



fuertemente; debido a que insultaban al Sargento Cárdenas, Jaime Salazar increpó y comenzó a insultar a los Infantes de Marina, por lo cual comenzaron a golpearlo con las armas que portaban, además de golpes de puño y pies. A cargo de este grupo de Infantes estaba un oficial de apellido Kholer. Fueron subidos “como sacos” en un camión, apilados unos sobre otros y sobre ellos se subieron unos Infantes de Marina, quienes durante todo el camino los golpeaban con los pies y los insultaban. Luego de unos minutos de viaje, llegaron hasta el cuartel de Infantería de Marina “Borgoño” en Talcahuano, específicamente a un lugar que tenían destinado para entrenamiento contra guerrillas urbanas. En este sitio y alumbrados sólo por los vehículos los obligan a desnudarse, luego son golpeados bajo las órdenes del Capitán Kholer. Jaime sufrió diversos tipos de tormentos: fue colgado de los pies y sumergido en un tambor con aguas servidas, lo introdujeron en un tambor al cual golpeaban y luego lo hacían rodar, fue arrastrados por el suelo, le torcían el cuerpo, fue objeto de “culatazos”, “picaneado” (pinchazos con las bayonetas), al igual que sus compañeros. Jaime recuerda que el más perjudicado fue Ernesto Zúñiga, quien recibió un corte bastante severo en el omoplato. Luego de algunas horas de haber sufrido torturas, fueron separados e interrogados en un cuarto donde había varios oficiales. Cuando le tocó su turno, los oficiales colocaron una grabadora y una pistola que estaba a su alcance. Dentro de los oficiales que pudo reconocer, estaban el Capitán Kholer, el Teniente Jaeger, el Teniente Pacheco y otros. Estos oficiales le preguntaban sobre las reuniones en Santiago, cuántas personas habían participado, entre otras cosas relacionadas con las actividades políticas. Debido a que estaba con algunas convulsiones, producto del frío y los golpes, le era difícil poder hablar. Este interrogatorio duró aproximadamente una media hora. Entre preguntas constantemente era amenazado con que su familia podría sufrir daños si no cooperaba. Terminados los interrogatorios, debieron dormir en sacos de dormir, en un lugar bastante rústico, aparentemente eran las mismas instalaciones que utilizaban para entrenamiento. Lograron dormir unas pocas horas, luego debieron bañarse y realizar ejercicios de gimnasia. Cómo no podían realizar los ejercicios por las condiciones físicas en que se encontraban, nuevamente fueron golpeados. Pedro Lagos Carrasco Fue llevado a la enfermería por cuanto estaba muy malherido. El sábado 11 de agosto de 1973 en la mañana, junto a varios compañeros marinos detenidos, fue conducidos hasta el Gimnasio Naval, lugar que era utilizado como cárcel provisoria. Debieron acomodarse en las butacas del recinto, por cuanto no existían camas. En este lugar había más personas detenidas, entre miembros de la armada y civiles, cuyo número aproximado era de unas veinte a treinta personas. Desde este lugar eran llevados en grupo hasta la Fiscalía Naval de Talcahuano, donde eran interrogados en forma individual por un Fiscal de apellido Jiménez, quien en ocasiones los careaba. Cuando fue interrogado por el Fiscal, éste salía en forma regular de la sala, con la finalidad de escuchar la grabación que habían realizado los Infantes de Marina el día anterior. Este fiscal no le dio ninguna



importancia a la condición física que tenían al momento de declarar ante él, a pesar de que evidenciaban los efectos de la golpiza a la cual habían sido sometidos en el “Cuartel Borgoño”. Luego del interrogatorio fue enviado nuevamente al gimnasio Naval, donde permaneció junto al resto de los detenidos por unos días más, para luego ser enviados hasta la isla Quiriquina. A dicha isla llegaron todos los que habían sido detenidos en Valparaíso. Fueron enviados a la Enfermería donde fueron atendidas sus lesiones y recibieron buena alimentación. El 17 de agosto son trasladados a Valparaíso en un destructor de la Armada, el APD 27 “Orella”; durante el viaje alguien constantemente gritaba que los arrojaran al mar. El día 18 de agosto de 1973 llegaron a Valparaíso y nuevamente son enviados al cuartel “Silva Palma” en libre plática. De a uno eran llevados a la Academia de Guerra Naval, donde eran entrevistados por el Fiscal Villegas. Recuerda que todos los que volvían luego de ser interrogados por el citado Fiscal quedaban incomunicados, por tal motivo y por recomendaciones de otros, aprovechó de escribir una carta a su familia, misiva que posteriormente fue publicada en los periódicos locales.

El Fiscal Villegas lo interrogó sobre los mismos hechos relativos a las reuniones políticas, haciendo hincapié en que entregara más nombres, además de saber si en la reunión realizada en Puente Alto había personas con acento extranjero. Como sus respuestas no fueron satisfactorias para el Fiscal, fue incomunicado por un lapso de tiempo más prolongado. Además, durante el interrogatorio que efectuaba el Fiscal estaba presente en la sala un teniente de apellido Benavides, quien de forma abusiva los golpeaba. Posteriormente y durante varias ocasiones fue llevado ante el Fiscal Villegas, que lo interrogaba por los mismos hechos, permaneciendo incomunicado hasta fines del mes de agosto de 1973. En el mes de septiembre fue levantada su incomunicación y pudo saber que tenía abogados defensores y que la situación de los marinos detenidos había provocado un gran revuelo en la ciudad. Se presentaron denuncias por torturas y el mismo Fiscal Villegas comenzó una investigación relacionada con estos hechos. Tras el golpe de Estado, nunca más supieron que ocurrió con esta investigación que se habían iniciado por las torturas denunciadas. Luego del 11 de septiembre la situación de los detenidos se complicó, eran tratados como traidores, poco a poco fueron conducidos hasta la cárcel pública. Jaime Salazar fue llevado a la cárcel el 22 de octubre del año 1973, fecha en la cual fue dado de baja de la Armada, bajo los cargos de sedición o motín frustrado. En la cárcel, todos los marinos fueron mantenidos en el Teatro del penal hasta aproximadamente el 24 de noviembre, cuando sorpresivamente ingresaron al recinto Infantes de Marina, quienes los amarraron y vendaron, para luego trasladarlos en camiones hasta un campo de concentración de la Armada, llamado “Isla Riesco o Melinka”. Este sitio estaba ubicado en los altos de Colliguay, en unos terrenos que pertenecían a la familia Matte, sitio en el cual permanecieron abril de 1974 aproximadamente. Este recinto estaba bajo la custodia de la Infantería de Marina, quienes continuamente los agredían con golpes de diferentes tipos y



con amenazas. Durante el periodo que permaneció en el campo, estaba a cargo de un Oficial de Mar, Teniente González, además de los Sargentos de Infantería de Marina Aguayo y Alegría, dos cabos, uno de apellido Álvarez y el otro de apellido Soto, entre otros.

En una oportunidad, los cabos Álvarez y Soto lo obligaron a desnudarse y lo obligaron a correr por el campo seguido por ellos, quienes lo golpeaban con unas varillas, motivado porque había cometido una infracción, no recuerda si por haber llegado tarde a una formación o por no llegar a comer.

Por un tema de logística, posteriormente el campo fue trasladado hasta la localidad de Puchuncaví, donde construyeron un campo de concentración con los mismos materiales que sacaron al dismantelar el Campo de “Melinka”. En este sitio permaneció por una semana, tras lo cual fue nuevamente enviado a la Cárcel de Valparaíso, aproximadamente a fines de abril de 1974, junto con el resto de los marinos detenidos, permaneciendo en este centro penitenciario hasta el mes de noviembre de 1976 aproximadamente, fechas en las cuales la Fiscalía Naval cerró el proceso y dictó las condenas. Jaime fue condenado a ocho años o más, no o recuerda. En esa fecha fueron trasladados hasta la Ex Penitenciaría de Santiago, donde permaneció hasta abril de 1978, cuando se firmó la ley amnistía y recuperó su libertad. Una vez libre, Jaime Salazar se dirigió a la casa de sus padres, donde unos carabineros lo estaban esperando. Le dijeron que no hiciera nada y que de lo contrario lo asesinarían. Ante las amenazas, a fines de mayo de 1978, optó por abandonar el país, con destino a la ciudad de Oakland, en California, Estado Unidos, donde reside hasta la fecha. Durante su permanencia en el Cuartel “Silva Palma”, pudo ser testigo a la distancia de los atropellos que se cometieron en el Buque Escuela “Esmeralda”, en el buque “Lebu” y en el “Maipo”, ya que, por la ubicación geográfica del recinto, se podía perfectamente observar estos navíos.

Respecto de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel, reconocido en el Informe Valech con el N°5.032, Marinero 1° de la Armada de Chile, dice que en agosto de 1973, éste se encontraba a bordo del Crucero Prat, embarcación a cargo del oficial Maurice Poisson. Fue detenido el 8 de agosto en Talcahuano, mientras se encontraba acuartelado con el resto del personal del Crucero. Alrededor de las 23.00 el Subteniente Orellana le manifestó que el Teniente Segundo Erwin Jaegar necesitaba hablar con él, por lo que concurrió a su presencia. Tras una hora le hicieron abandonar el buque y subirse a un jeep junto al oficial mencionado. Fue trasladado al Fuerte Borgoño amenazado con una pistola apuntando su cabeza, de que si se movía lo matarían. Cuando llegaron al Fuerte Borgoño, fue bajado del jeep y guardias de la marina comenzaron a golpearlo con las culatas de los fusiles y con golpes de pies, delante del oficial que no decía nada ni impedía el hecho. Fue obligado a desnudarse, le gritaban insultos como “vende patria” y “traidor”, propinándole patadas y golpe con la culata de fusil, obligándolo al mismo tiempo a correr en una cancha



de fútbol, sólo podía hacer una pausa cuando caía al suelo por los golpes o el agotamiento. En este lugar perdió el conocimiento. Despertó en un lugar de madera, le habían tirado agua con un fuerte chorro a presión, mojándolo. Estaba amarrado con las manos atrás, lo pusieron de rodillas para seguir golpeándolo, tenía dolores horribles, especialmente en los genitales. Como no respondía lo que ellos querían, fue colgado cabeza abajo, amarrado de pies lo sumergieron en un tambor con aguas fétidas, cuando perdía la respiración lo levantaban. Mientras permanecía colgado, seguían golpeándolo. El “tratamiento” se repitió varias veces. En un momento que ya no daba más, lo arrastraron (ya que no podía caminar), hasta una zanja con barro y lo tiraron dentro, hundiéndolo hasta el cuello. Esta situación sumada al frío, le provocó principios de hipotermia, fuertes e incontrolables espasmos y “tiritones”. Junto a él estaban en las mismas condiciones otros marinos, con quienes gritaba por el dolor y el frío que sentían. Ya de madrugada fue llevado a una sala de madera donde le obligaron firmar una declaración, tenía los párpados hinchados, por lo que no lo dejaron ni podía leer. Le señalaron que debía ratificarla ante el fiscal bajo amenaza de volver a ser torturado nuevamente en el Cuartel Borgoño. Al día siguiente fue sacado al patio del Fuerte, donde debió permanecer de pie casi todo el día junto a otros detenidos, eran alrededor de 13 ó 14 marinos, entre los que recuerda a Víctor López, Carlos García Herrera, Bernardo Carvajal, Antonio Rojas, Silverio Lagos, René Rojas y otros. En la tarde fue llevado a la Fiscalía Naval, ubicada en la Base Naval. Fue interrogado por un Fiscal a quien le relató lo sucedido, también le mencionó las lesiones que presentaba. El Fiscal no hizo nada al respecto y lo dejó incomunicado por doce días, durante los cuales no tuvo acceso a hablar con un abogado. Durante los días que permaneció incomunicado en el Gimnasio de la Base Naval, era sacado e interrogado por oficiales con el grado de capitán, de los cuales desconoce nombres. Estando incomunicado vio llegar a Sergio Fuentes y Juan Roldán. En uno de los traslados a la Fiscalía vio a Pedro Lagos Carrasco, quien se encontraba en muy mal estado físico, tenía hematomas en el rostro y dificultad para caminar.

Su incomunicación fue levantada a fines de agosto y se le notificó recién que estaba detenido por incumplimiento de deberes militares, al igual que otros marinos. Sus familiares pudieron saber de su situación y contratar abogados. Su abogado apeló del procesamiento, el cual fue posteriormente modificado a Motín o sedición frustrada, después del 11 de septiembre y sin nuevos antecedentes. Alrededor del 3 de septiembre fue trasladado a la cárcel de Talcahuano y después a la cárcel de Concepción. Después del 11 de septiembre de 1973 comenzaron a llegar presos políticos a los lugares donde estaban detenidos, por lo que se les asimiló en cuanto a régimen de custodia y tratamiento. A mediados de septiembre de 1973, en la cárcel de Concepción, les hicieron desalojar las celdas que ocupaban para que durmieran ahí su última noche cuatro militantes comunistas de Lota que fueron fusilados al día siguiente, entre ellos estaba Isidoro Carrillo, alcalde de Lota. Los marinos detenidos fueron los últimos que vieron con vida a estas cuatro personas.



A fines de septiembre, principios de octubre les modifican el procesamiento de incumplimiento de deberes militares a sedición o motín frustrado, en calidad de cómplice. Se les había cambiado el tipo penal sin nuevos antecedentes, por uno mucho más gravoso. El 28 o 29 de noviembre fue trasladado desde la cárcel de Concepción a la cárcel a Valparaíso con Antonio Ruiz Uribe. Durante todo el viaje permanecieron encadenados. Al llegar a la estación Central fueron golpeados por un oficial de Ejército, ya que supo que se trataba de marinos que adherían al gobierno depuesto. Luego de la intervención del jefe de la guardia, fueron llevados a la Penitenciaría de Santiago por un día y continuaron el viaje a la cárcel de Valparaíso. En Valparaíso conoció la situación de los otros marinos de Valparaíso que habían pasado una situación similar a la suya (detención y torturas). Fue interrogado por el Fiscal Naval de Valparaíso. El 14 de diciembre los marinos fueron subidos fuertemente amarrados a camiones de la Infantería de Marina y llevados al Campo de Prisioneros de Melinka o Isla Riesco (también se le conocía como “Operación x”), donde permaneció un mes. El trato en el campo fue muy duro, eran custodiados por infantes de marina, a quienes los oficiales habían informado que los marinos detenidos planeaban matarlos a ellos y sus familias, por lo cual su trato era especialmente duro. Eran castigados reiteradamente, amenazados de muerte, los separaron de los demás presos políticos por “peligrosidad” (de los marinos detenidos), eran estrictamente vigilados, la alimentación era escasa. Los obligaron a excavar un hoyo de 6 metros de diámetro, que pensaron que tendría una finalidad siniestra. En el campamento, a mediados de febrero de 1974, sufrió un ataque de apendicitis, por lo que fue llevado en helicóptero al Hospital Naval. Antes de partir un infante de marina lo amarró muy fuerte, le hizo cerrar los ojos, le puso tierra encima y luego se los vendó. En esas condiciones viajó al Hospital Naval donde fue operado. Permaneció 3 días custodiado día y noche por un hombre armado. Desde el Hospital lo trasladaron al Cuartel Silva Palma. Fue llevado vendado, lo hicieron subir y bajar escaleras hasta que lo dejaron en una sala de interrogatorio. Debíó estar de pie unas 5 a 6 horas (recién operado). Cada vez que pasaba un guardia le preguntaba su nombre y lo golpeaba. Uno de ellos le pegó en la herida, causándole un fuerte dolor, le indicó que lo acaban de operar y el guardia le volvió a pegar en el mismo lugar. En un momento alguien le preguntó quién era y de donde venía y cuál era su actividad profesional, respondió que era marino del contingente del '69, se preocuparon por él, ya que muchos de los que estaban ahí había sido conocidos o amigos, cree que alguien lo reconoció. Una persona lo tomó fuertemente del brazo y lo condujo a otro lugar, le costaba caminar por la inmovilidad y los golpes, el guardia no quiso escucharlo, sino que lo reprendió y volvió a golpear. Cuando preguntó dónde lo llevaban, él guardia le dijo que le quitaría la venda, pero no podía mirar, lo hizo de manera muy violenta por lo que le tiró cabeza hacia atrás y le vio la cara, el guardia dio un enorme grito y lo llamó “Pillín”, que era como le decían a Guillermo. Se trataba del marinero Leighton, habían sido amigos en la Escuela Naval. No



lo volvió a ver en el recinto. En este cuartel recibió un trato muy duro, en condiciones deplorables ya que, tras el golpe de Estado, el Cuartel Silva Palma se había convertido en un centro de torturas de la marina. A las seis de la mañana los sacaban a correr fue reconocido por un oficial, Teniente Contreras, quien había servido en el Crucero O'Higgins en el año 70 y fue la única persona que tuvo un gesto humano con él. Al ver su dificultad para correr y tirarse al suelo, le preguntó porque se encontraba ahí, le respondió con desconfianza, pero dio la orden que lo llevaran a descansar. Durante todo el día permanecía encerrado, para ir al servicio higiénico llamaban al guardia y se preparaba “el tren”, debían amarrarse la vista y eran llevados de cuatro en fila india. A mediodía les llevaban la comida que sobraba al personal y cuando eran muchos, se hacía poca. A las 18.00 horas los sacaban a cantar la canción nacional. En este lugar se mantenía a unas 30 personas detenidas, aunque llegaron a ser 80. Eran sacados de día y noche para interrogatorio, fue sacado reiteradas veces. Los interrogatorios eran acompañados por torturas, querían que delatara a personas que permanecían en la Armada. En este lugar recibió fuertes golpizas. Además, escuchaban los gritos de hombres y mujeres mientras eran torturados. Algunos guardias eran de su promoción en la Escuela de Ingeniería por lo que pudo reconocerlos, estaban David González, Luis Carilao, Ricardo Eyzaguirre, Marinero 1° Venegas, apodado “el Manopla”, quien era de los que golpeaba a los detenidos. También reconoció al marinero Collao, promoción 1970, quien portaba una varilla y también golpeaba a los prisioneros; los marineros Leyton y Arévalo. El 30 de abril fue informado que al día siguiente sería trasladado. El 1 de mayo de 1974 fue trasladado junto a un grupo de estudiantes del MIR, además de trabajadores socialistas y de las juventudes comunistas al Campo de Prisioneros de Puchuncaví. En este grupo se encontraban Alfredo Saieg, Rodrigo Alcázar, Eduardo Ulloa y un joven de apellido López Hernández Aceituno. En este trayecto no fue vendado, fueron arrojados boca abajo al piso del vehículo con prohibición absoluta de moverse o hablar. Llegaron a Puchuncaví, que era un nuevo campo de concentración. Fueron dejados en la guardia. Preguntó por sus compañeros y le dijeron que habían sido trasladados con destino desconocido. En la noche, a la hora de encierro, fueron formados con el resto de los prisioneros, ellos estaban extrañados porque había muchos carceleros en esa oportunidad, todos infantes de marina. Al término de la formación, un suboficial Sargento Núñez, pidió que los que habían llegado ese día se quedara y el resto se fuera a las cabañas. Guillermo con el grupo que había llegado ese día fueron llevados a la parte trasera del campo, que estaba llena de tierra y alambres de púas. El sargento les señaló que “si eran hombres”, que los del MIR se pusieran a un lado. Ante una pregunta del sargento, Guillermo respondió que era ex miembro de la marina. El sargento fue muy despectivo e insultante, le dijo “así que tú eres de los marinos de Altamirano”, lo llamó “traidor”, “asesino” y otras ofensas. Ordenó que lo llevaran con el grupo de jóvenes, fueron pateados salvajemente, debieron arrastrarse por el





suelo, pasar por sobre los alambres de púas, meter la cabeza en la tierra. Les cubrían la cabeza con tierra y luego los guardias orinaron sobre ellos. El castigo duró mucho tiempo, al tiempo que los golpeaban los hacían cantar canciones sobre la Unidad Popular. Luego los llevaron a las cabañas. El periodo de permanencia en el campo fue largo y difícil. Los hicieron hacer trabajos forzados, debieron alambrar todo el recinto y trabajar en los lugares que usaban los infantes (fabricar betón para poner cemento). El 4 de julio, Guillermo Castillo fue trasladado a la cárcel pública de Valparaíso, donde pudo reencontrarse con sus compañeros marinos. Permaneció en la cárcel hasta fines de 1976, fecha en que recobró su libertad y quedó sujeto a firma semanal en la Fiscalía Naval. En el año 1977 salió del país con destino a Bélgica.

En cuanto al daño producido, sostiene que las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes descritos en cada caso en particular, han producido en los demandantes un grave y serio perjuicio, tanto físico como psíquico, provocado por agentes del Estado de Chile durante los días previos y posteriores al golpe de Estado. Los daños físicos y psíquicos han permanecido en el tiempo; aunque han transcurrido casi cuarenta y cinco años de los hechos, nuestros representados continúan con secuelas derivadas de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos; además, perdieron su puesto y grado en la Armada, a la que pertenecían desde muy jóvenes. Los demandantes se formaron en la Armada y ser marinos era parte de su identidad; a mayor abundamiento fueron tratados como “prisioneros de guerra”, encarcelados en campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzados y la mayoría obligada, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar durante muchos años, alejándose de sus familias y amigos. En este caso en particular, estamos además frente a los delitos cometidos contra nuestros representados, por sus propios compañeros de armas.

Por tales consideraciones demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro o detenciones legales, torturas y tratos inhumanos y degradantes, prisión política y encarcelamiento producto de procesos basados en confesiones obtenidas bajo tortura y sin la debida defensa, todas ofensas de las que fueron objeto los demandantes, al pago de \$200.000.000, para cada uno de los demandantes, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el Tribunal de conformidad con su apreciación y valorización del daño determine.

En cuanto al derecho, hace presente que de los hechos criminales narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros activos de la Armada de Chile, así como de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. La



responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a los actores emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa. Del mismo modo, la responsabilidad del Estado emana del derecho internacional de los derechos humanos, vigente a la época de comisión de los actos denunciados como en la actualidad.

Señala que atendido el principio de vigencia in actum de normas ius publicistas del Derecho Administrativo. El artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República dispone que "Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño." En esta disposición constitucional se establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmente por ser de carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los organismos, como en el caso de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado. Por su parte, el artículo 4 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de 1986, prescribe que "El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiera ocasionado". El artículo 44 de esta Ley agrega: "Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio".

Afirma que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en nuestro caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980.

Finalmente hace presente sobre el deber de reparar del Estado de Chile al tenor de las normas, tratados internacionales y jurisprudencia que cita.

Concluye en mérito de lo expuesto y dispuesto en las normas legales que cita, solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fueron sometidos, la suma de \$ 200.000.000 a cada uno de los demandantes (1) Juan Guillermo Roldán Bernal; (2) Santiago Enrique Rojas Campos; (3)



René Alejandro Rojas Trincado; (4) Víctor Alamiro López Zambrano; (5) Bernardo Carvajal Sepúlveda; (6) Jaime Ricardo Salazar Jeldres; y (7) Guillermo Gabriel Castillo Esquivel, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 26 de septiembre de 2019, doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, procede a contestar la demanda conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Opone a la acción deducida la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la Ley 19.123 y las demás normas conexas (como la Ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); C) Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123; E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.- En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Afirma que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos



individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactoria mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.

Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.



En este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

*“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo– percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile,*



*como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.*

Posteriormente, además de la excepción de reparación integral alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por los demandantes dada la data de los hechos relatados como fundantes de su pretensión, es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 05 de septiembre de 2019, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.*



En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 22 de octubre de 2019, obra réplica de los actores, sin incorporar hechos sustantivos nuevos a la causa.

Con fecha 30 de octubre de 2019, consta dúplica del demandado, donde procede a reiterar las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio Especial de Hacienda, se omitió el llamado a conciliación.

Con fecha 25 de marzo de 2022, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental y testimonial que obra en autos.

En la causa se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don Pedro Blaset Castro, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Sótero del Río n°326, n°707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don Juan Guillermo Roldán Bernal, jubilado, domiciliado en n°2067, Ottawa Street, Regina Saskatchewan, S4P 1P9, Canadá; don Santiago Enrique Rojas Campos, contador general, domiciliado en calle René Pienovi, Pasaje Telesforo Barahona, casa n°5, Recreo, Viña Del Mar; don René Alejandro Rojas Trincado, pensionado, domiciliado en calle Valle Central n°0882, Villa Mirador de Los Andes, Puente Alto; don Víctor Alamiro López Zambrano, ingeniero en telecomunicaciones, domiciliado en Pasaje Ingeniero Eduardo Domínguez n°1021, comuna de Maipú; don Bernardo Carvajal Sepúlveda, jubilado, domiciliado en calle Matilde n°622, Belloto Centro, comuna de Quilpué; don Jaime Ricardo Salazar Jeldres, mecánico de mantención, domiciliado en 1700 Mountain Boulevard, ciudad de Oakland, California, CP 94611, Estados Unidos; y de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel, técnico en sonido, domiciliado en calle Millalelmo n°236, comuna de Los Vilos, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas n°1687, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fueron sometidos la suma de \$



200.000.000 a cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

**SEGUNDO:** Que, doña Ruth Israel López, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

**TERCERO:** Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

**CUARTO:** Que, a fin de acreditar sus dichos los demandantes acompañaron la prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia de Informe Policial n°62, emitido por Policía de Investigaciones de Chile con fecha 06 de marzo de 2009 y dirigido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso; copia de extracto reportaje escrito denominado “Esto Pasó en Chile”; copia de Declaración Jurada de don Jaime Ricardo Salazar Jeldres realizada ante don Fernando Varela Palma, Cónsul General de Chile en Estados Unidos; copia de declaración judicial efectuada por don Pedro Lagos Carrasco de fecha 14 de octubre de 2008; copia de documento denominado “Memoria Colectiva de Los Marinos Anti Golpista de la Escuela de Ingeniería de La Armada de Chile 1973 – Proceso 3941; copia de declaración judicial efectuada por don Sergio Edinson Fuentes Paredes el 10 de febrero de 2015 efectuada en los autos rol 980-2008; copia de declaración policial de don Pedro Pablo Blaset Castro realizada el 25 de noviembre de 2008; copia de declaración judicial realizada por don José Manuel Velásquez Muñoz el 29 de enero de 2015 en los autos rol 980-2008; copia de declaración policial de don Pedro Lagos Carrasco realizada el 05 de diciembre de 2008; copia de declaración judicial realizada por don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel el 28 de marzo de 2013 en los autos rol 980-2008; copia de acta de inspección ocular realizada el 17 de diciembre de 2008 en los autos rol 980-2008; copia de Sentencia Definitiva dictada en la causa rol 3926 por el Juzgado Naval de Valparaíso de fecha 03 de mayo de 1976; copia de certificado de fecha 11 de octubre de 2001, sin traducir; copia de Formulario Para Residentes en el Exterior n°21492 de fecha 26 de abril de 2004 realizado por don Juan Guillermo Roldán Bernal; copia de Informe Psicológico n°171-2015 de don Bernardo Carvajal Sepúlveda suscrito por doña Mónica Soya Arellano, Psicóloga Forense del Servicio Médico Legal; copia de declaración judicial de don Patricio Mario Cordero Cedraschi realizada el 08 de abril de 2019; copia de declaración judicial de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel realizada el 28 de marzo de 2013 en los autos rol 980-2008; copia de declaración judicial de don Bernardo Carvajal Sepúlveda realizada el 03 de diciembre de 2014 en los autos rol 980-2008; copia de presentaciones efectuadas el 11 de junio y 01 de abril de 2003 en el Juzgado Naval de Valparaíso en los autos rol n°3926; copia manuscrita de relato efectuado por don Bernardo Carvajal Sepúlveda; copia de Ficha de Ingreso Preso Político y/o torturado n°4920 de fecha 09 de diciembre de 2003





realizada por don Bernardo Carvajal Sepúlveda; copia de extracto de reportaje escrito denominado “Los Detenidos”, sin fecha; copia de Decreto Exento n°398 de fecha 30 de marzo del año 2000, dictada por el Ministerio del Interior de Chile; copia de Listado de libros y artículos de diarios; copia de Informe Psicológico n°09-2015 de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel suscrito por doña Mónica Soya Arellano, Psicóloga Forense del Servicio Médico Legal; copia de declaración judicial realizada por don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel y don Guillermo Tomás Morera Hierro en los autos rol 47-2016; copia de declaración policial de don René Alejandro Rojas Trincado de fecha 26 de noviembre de 2014; copia de declaración policial de don Pedro Lagos Carrasco efectuada el 05 de diciembre de 2008; copia de declaración judicial de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel realizada el 28 de marzo de 2013 en los autos rol 980-2008; copia de declaración judicial de don Carlos Arturo García Herrera realizada el 05 de noviembre de 2015 en los autos rol 980-2008; copia de nómina de Personal Exonerado de la Armada por Motivos Políticos emitido por la Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada Nacional; copia de Ordinario n°1600/25 emitida por el Secretario General de La Armada; copia de Ficha de Ingreso Político y/o Torturado sin n°, de fecha 30 de abril efectuada por don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel; copia de documento denominado “Anomalías Jurídicas de Procesos y Condenas a Procesados y Condenados Políticos Encarcelados en Chile; copia de Informe Psicológico Forense de don Santiago Enrique Rojas Campos emitido el 15 de julio de 2022 por don Fernando Van Spronsen Matus, Psicólogo y Perito Forense; copia de Formulario Para Residentes en el exterior, ficha de ingreso preso político y/o torturado n°21183 de don Santiago Enrique Rojas Campos realizada el 01 de abril de 2004; copia de Antecedentes de Gendarmería de don Santiago Rojas Campos, sin fecha; copia de ficha de ingreso preso político y/o torturado n°21418 de don René Alejandro Rojas Trincado realizada el 26 de enero de 2004; copia de resolución de absolución de don Víctor Alamiro López Zambrano fecha 07 de enero de 1992; copia de certificado judicial de fecha 17 de diciembre de 2012; copia de Informe Policial n°1400 código 2020 de fecha 23 de marzo de 2015 elaborado por Policía de Investigaciones y enviado a la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso; copia de Informe del Servicio Médico Legal n°548-09 respecto de don Víctor López Zambrano de fecha 17 de junio de 2009 elaborado por el Servicio Médico Legal; copia de Declaración Jurada realizada por don Carlos Arturo García Herrera el 14 de noviembre de 2014 ante don Eric E, Verbeeck, Cónsul Honorario de Chile en Amberes; copia de declaración judicial de don Jaime Ricardo Salazar Jeldres efectuada el 19 de febrero de 2015 en los autos rol 980-2008; copia de declaración judicial realizada por don Víctor Alamiro López Zambrano el 20 de noviembre de 2008; copia de auto de procesamiento dictado en los autos rol 980-2008 el día 21 de octubre de 2015 por don Jaime Arancibia Pinto, Ministro en Visita Extraordinaria y copia de Carpeta de Antecedentes de don Víctor López Zambrano presentada ante la Comisión Valech; copia de



ficha de ingreso preso político y/o torturado, realizada por don Víctor Alamiro López Zambrano; copia de Certificado de cumplimiento de sentencia dictada el 03 de mayo de 1976 en la causa n°3926 por el Juzgado Naval de Valparaíso; copia de Certificado de Antecedentes n°18013661 relativa a don Víctor Alamiro López Zambrano, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación el 19 de marzo de 1990; copia de ficha de ingreso preso político y/o torturado n°22082 de fecha 07 de enero de 2004 realizada por don Jaime Ricardo Salazar Jeldres; copia de Carta enviada por el Secretario del Departamento de Estado de Washington D.C sin fecha ni traducción; copia de extracto de reportaje realizado en mayo de 1993 por el periódico estadounidense “United Worker” denominado “Democracy-For Jaime Salazar, More than a Word” sin traducir; copia de Informe Psicológico Forense de don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel emitido el 12 de mayo de 2022 por don Fernando Van Spronsen Matus, Psicólogo y Perito Forense; copia de documento denominado “Evaluación de Daño” de fecha 18 de abril de 2022 respecto de don René Alejandro Rojas Trincado suscrito por don Ignacio Fernández Rosas, Psicólogo Clínico Programa Prais y doña Pamela Jeria Ortiz, Médico Interno del Programa Prais; copia de Certificado Psicológico y Social de fecha 20 de octubre de 2021 respecto de don Juan Guillermo Roldán Esquivel suscrito por doña Fresia Alejandra Vargas Neira, Psicóloga Clínica CINTRAS y don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo CINTRAS y ; copia de Certificado Psicológico y Social de fecha 15 de septiembre de 2021 respecto de don Víctor Alamiro López Zambrano suscrito por doña Fresia Alejandra Vargas Neira, Psicóloga Clínica CINTRAS y don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo CINTRAS.

**QUINTO:** Que, además rindieron prueba testimonial relativa a la declaración de don Luis Ernesto Tricot Novoa; don Ricardo Alberto Tobar Toledo; don Alejandro Basilio Benavente Fonseca y don Gastón Armando Araya Callejas.

**SEXTO:** Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar. Sin embargo, obra a folio 20 copia de respuesta oficio que ésta solicitara, consistente en ORD DSGT N°62222/2019 de fecha el 27 de noviembre de 2019, emitido por el Instituto de Previsión Social que da cuenta de los montos por reparación de la leyes N° 19.234, 19.992 y 20.874 recibidos por los demandantes.

**SEPTIMO:** Que, don Juan Guillermo Roldán Bernal, don Santiago Enrique Rojas Campos, don René Alejandro Rojas Trincado, don Víctor Alamiro López Zambrano, don Bernardo Carvajal Sepúlveda, don Jaime Ricardo Salazar Jeldres y don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel han comparecido a estrados invocado su calidad de víctimas de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado de Chile.

**OCTAVO:** Que, del mérito de lo expuesto en la fase de discusión de estos antecedentes, conforme los hechos contenidos en libelo pretensor que no han sido rebatidos por el demandado, la respuesta a oficio singularizada en el fundamento sexto de este fallo y



la copia de la Nómina del Personal Exonerado de la Armada de Chile Por Motivos Políticos, no objetada, sumado a la prueba testimonial rendida por la parte demandante, se tiene por acreditado que todos los demandantes de estos autos son víctimas de violación a los derechos humanos por los hechos reseñados en el libelo, consistentes en las detenciones ilegales y torturas que siendo integrantes de la Armada de Chile padecieron a partir del 6 y 7 de agosto de 1973, de parte de agentes del Estado integrantes de dicha rama de las fuerzas armadas.

**NOVENO:** Que, el Fisco de Chile, junto con no rebatir el tiempo de detención ilegal de los demandantes, opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 05 de septiembre de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

**DECIMO:** Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de los actores por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

**UNDECIMO:** Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

**DUODÉCIMO:** Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y



obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

**DÉCIMO CUARTO:** Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

**DÉCIMO QUINTO:** Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que los demandantes ya han sido indemnizados, ello en virtud de la dictación de la Ley 19.123 –y sus modificaciones- que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en la afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral de los demandantes el que hicieron consistir en el sufrimiento y angustia irrogada por la detención ilegal, diversas torturas físicas y psicológicas cometidas en sus persona por agentes del Estado a contar del 06 de agosto de 1973, esto es, con anterioridad a la perpetración del Golpe de Estado llevado a cabo el 11 de septiembre del mismo año.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el



artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimará la alegación de suficiencia de pago.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, siendo un hecho indubitado la calidad de víctimas invocadas por los demandantes, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

**VIGÉSIMO:** Que, a fin de acreditar el daño moral específico invocado, obra prueba testimonial consistente en la declaración de don Luis Ernesto Tricot Novoa, don Ricardo Alberto Tobar Toledo, don Alejandro Basilio Benavente Fonseca y don Gastón Armando Araya Callejas, quienes legalmente examinados, exentos de tacha y dando razón de sus dichos, ilustran al Tribunal al tenor de lo consignado en la interlocutoria de prueba de autos.

En efecto, el testigo Tricot Novoa expresa conocer a los demandantes mientras estos se encontraban en la Cárcel Pública de Valparaíso y en el Campo de Concentración de Isla Riesco, quienes se encontraban presos desde el mes de agosto de 1973 en virtud de la detención realizada por miembros de la Armada, siendo torturados con golpes de pies, puños, colgados, sumergimientos en tarros con excremento y agua sucia, simulacros de fusilamiento y también con aplicación de tormentos (electricidad). En cuanto a los perjuicios, explica que producto de lo anterior los demandantes presentaba evidentes huellas de los tratos, los cuales se constataban en sus aspectos físico y también personales como episodios de depresión.

Luego, el testigo Tobar Toledo declara conocer al demandante Juan Roldán, pues entraron juntos a la Marina, siendo trasladados a mediados de noviembre de 1973 al campo de concentración llamado Melinka, oportunidad en la cual conoció al restante de sus compañeros. Agrega que fueron objeto de golpes de pies y puños, culatazos, inmersión en tambores con excremento, en tarros con barro, lo principal para algunos es el daño en sus oídos por los golpes, cortes en el cuerpo, simulacros de fusilamiento, existieron todas las amenazas si no firmábamos las declaraciones falsas que les hacían repetir y los amenazaban con que violarían a sus mujeres, hermanas o hijas, ello fue un grave daño en la parte psicológica, quedan con mucho dolor interno, no pueden dormir.

Respecto del testigo Benavente Fonseca, expresa que conoce a los demandantes pues estuvo preso con ellos, con algunos en Talcahuano (Isla Quiriquina) y con otros en la cárcel de Valparaíso, esto desde el 01 de septiembre 1973 hasta 1976. Relata que fueron



torturados con sumergimientos en un barril, y aplicación de electricidad, cuestión que les provocó daños permanentes como problemas de olvido y audición.

Finalmente, el testigo Araya Callejas, afirma conocer a los actores Castillo, Carvajal, López, Rojas Campos, Rojas Trincado y Salazar pues unos embarcados en el Buque Prat y otros los conoce del departamento de mecánica. Añade que estos fueron torturados con golpes de armas.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, además, rindieron abundante prueba instrumental respecto de la cual solo resulta pertinente al caso sublite –en cuanto a la acreditación de los perjuicios reclamados- los informes psicológicos emitidos por el Servicio Médico Legal, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) e informe privado emitido por don Fernando Van Spronsen Matus, Psicólogo y Perito Forense, que dan cuenta, sucintamente, sobre las consecuencias extrapatrimoniales de todo aquel sujeto que fuera objeto de detención ilegal, prisión política y tortura, esto último como antecedente indubitado respecto de todos los demandantes de estos autos.

**VIGÉSIMO SEGUNDO** Que sin perjuicio que esta Magistrado observa una debilidad probatoria tendiente a acreditar con mayor nitidez el daño moral específico sufrido por cada uno de los demandantes, es del caso que encontrándose acreditada su calidad de víctimas de violación a los derechos humanos, en concordancia a la prueba testimonial e instrumental precitadas, es posible entender que naturalmente han sufrido una aflicción producto de los tratos inhumanos a que fueron expuestos por agentes del Estado, el que debe conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizado, por tanto se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$45.000.000 en favor cada uno de los demandantes.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

**VIGÉSIMO CUARTO** Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Por estas consideraciones y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las



víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de \$45.000.000 para cada uno de los demandantes, esto es, don Juan Guillermo Roldán Bernal, don Santiago Enrique Rojas Campos, don René Alejandro Rojas Trincado, don Víctor Alamiro López Zambrano, don Bernardo Carvajal Sepúlveda, don Jaime Ricardo Salazar Jeldres y don Guillermo Gabriel Castillo Esquivel, más los intereses y reajustes señalados en el considerando vigésimo tercero de este fallo;

III. Que se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Lidia Ferrada Valdebenito, Jueza Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Abril de dos mil veintitrés**

